

internas y discordias civiles habían precedido a su advenimiento al trono portugués. La obra legislativa, felizmente llevada a cabo, no se confió a los canonistas y hombres de leyes castellanas, sino a los Letrados, los Jurisconsultos y los Teólogos de Portugal (AGUIAR, VÁZQUEZ DE ARCE, COVEDO, ALONSO, etc.), y por eso fué de condición intencional y prácticamente portuguesa, sin que la integrase ni una sola disposición del Derecho de Castilla, salvo aquellas que se habían incorporado establemente al Derecho del país, por la vía directa de la doctrina o por el esfuerzo de la jurisprudencia. El mismo hecho de que la Pragmática que puso en vigor las "Ordenaciones" se expidiese por Felipe II, no como Rey castellano, sino como Monarca portugués, destaca y pone de relieve, por sí solo, el propósito, bien definido, de rehuir todo intento de absorción del país, cuyos destinos, con los españoles, habían de ser regidos por un solo Monarca.

Y por eso se explica que cuando los portugueses vindicaron su soberanía y alzaron a Juan IV, las "Ordenaciones" se respetasen en su integridad, limitándose a sustituir su nombre, con cuyo arbitrio pudo lograrse que, pese a todas las mutaciones políticas, estuviesen en vigor doscientos cincuenta años, hasta la codificación portuguesa, y que en el Brasil perdurasen mientras vivió unido a la Metrópoli.

Sin embargo, la orientación generosa de la obra legislativa, que tanto influyó en su pervivencia, no fué obra del azar, sino fruto de tres factores que explican, desde diversos ángulos visuales, la orientación del Cuerpo legislativo. De un lado, una razón sentimental: la formación portuguesa de Felipe II, hijo de una Princesa de esa nacionalidad, cuyos pasos infantiles guió un aya portuguesa, doña Leonor de Mascarenhas; en la madurez, asoció a sus Consejos, para hacerlo después su Embajador en el país vecino, a una personalidad tan recia y tan ligada a él como la del famoso don Cristóbal de Mouras, a cuyo nombre va asociada la *empresa de Portugal*. De otra, una razón doctrinal: la educación política del Monarca le permitía apreciar, con toda evidencia, la necesidad de templar el respeto a su soberanía absoluta, de que se mostró tan celoso, con aquellas dotes de prudencia y aquellos precavidos asesoramiento, que, sin mengua de su celo por la plena dignidad de la realeza, le aconsejaba velar acuciosamente por la integridad del derecho propio de los países incorporados a la Corona. Y, en fin, una razón, que el disertante denominó *institucional*, le impulsaba a proceder como lo hizo; porque para exaltar la fuerza de la institución monárquica, tal como se la concebía y practicaba en su tiempo, no había de atender tan sólo a extender su patrimonio, sino que le interesaba, por modo más apremiante, realizar una obra tan perdurable como la misma institución real, que estuviese por encima del tiempo y al margen de las contingencias y vaivenes de la política.

Unas afinadas y elocuentes palabras sobre la fraternidad hispanoportuguesa, impuesta por razones inmutables físicas y geopolíticas, pusieron término a la intere-

sante conferencia, que favorecieron con su asistencia muy señalada el Embajador portugués, relevantes personalidades del Cuerpo diplomático y una representación lucidísima del Foro y la Magistratura de la capital.

M. DE LA P.

Índice legislativo de Derecho privado

Mes de marzo de 1945.

- a) *Decreto del Ministerio de Hacienda de 3 de febrero de 1945*, por el que se fija el límite de la circulación fiduciaria. (B. O. del E. del día 16.)
- b) *Orden del Ministerio de Hacienda de 13 de marzo de 1945*, sobre pago de rescate en aplicación de la ley de 25 de noviembre de 1944. (B. O. del E. del día 17.)
- c) *Ley de la Jefatura del Estado de 17 de marzo de 1945*, por la que se reforma la de los impuestos de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes de 29 de marzo de 1941. (B. O. del E. del día 18.)
- d) *Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de marzo de 1945*, por la que se dictan normas para la aplicación de la ley de 17 de marzo de 1945 de los impuestos de Derechos reales y sobre transmisiones de bienes. (B. O. del E. del día 24.)

D. E. ESPÍN.

Notas bibliográficas ^(a)

EUSTAQUIO GALÁN y GUTIÉRREZ: *La filosofía política de Santo Tomás de Aquino*. Edit. REVISTA DE DERECHO PRIVADO, Madrid, 1945.

Quien conozca las anteriores producciones salidas de la pluma de este joven Catedrático de Filosofía del Derecho, no podrá extrañarse de la claridad y rigor técnicos de los que hace gala al enfrentarse con la grandiosa figura del Ángel de las Escuelas, en uno de los aspectos más interesantes de la obra aquinatense: las doctrinas políticas. Falta hacia en España un manual en el que, monográficamente, se expusiese la ideología política del gran dominicano, tan en boga actualmente. En efecto: asistimos en nuestra Patria a un aguzado revivir de la filosofía tomista, y raros son los universitarios que no se han dejado penetrar de la profunda sabiduría de Santo Tomás. Por eso, hasta ahora, muchas veces, al recomendar bibliografía a los alumnos donde puedan profundizar en la filosofía política tomista, somos muchos los Profesores que hemos venido lamentando la falta de un libro en el que fuera posible encontrarla expuesta con claridad, método y sentido crítico.

El estudio que hoy nos ofrece el Profesor GALÁN cum-

(a) En esta sección daremos cuenta de las obras que se nos remitan en doble ejemplar.

ple todos estos requisitos, tan necesarios. Desde la fundamentación antropológica hasta la teoría de las sanciones, con un completo dominio de la terminología de la Escuela, el autor hace desfilar ante los lectores la teoría tomista del Estado, desde el ángulo visual y técnicamente irreproachable de las causas. Especial encomio merece la pulcritud de algunas interpretaciones, como, por ejemplo, la que GALÁN hace de la teoría tomista de la propiedad, de tanta transcendencia en nuestro tiempo.

Auguro a este magnífico estudio monográfico un gran éxito, tanto por la bondad de su factura como por la oportunidad con que aparece.

F. ELÍAS DE TEJADA.

*Catedrático de Filosofía del Derecho
en la Univ. de Salamanca.*

Agustín VICENTE Y GELLA: *Curso de Derecho mercantil comparado*, tomo I, Zaragoza, 1944.

Al reseñar desde estas mismas páginas al Profesor Polo, en 1941, la publicación del *Curso de Derecho mercantil*, de Joaquín GARRIGUES (1), hacía un resumen de tratadistas españoles en materia comercial, y citaba al autor de la obra que motiva esta nota entre los "tratadistas y comentaristas del primer tercio del siglo XX", aludiendo a su obra *Introducción al Derecho mercantil comparado*, publicada en 1930.

Y, en efecto, VICENTE Y GELLA demuestra plenamente en su obra que es acreedor a un puesto destacado entre aquellos que dedican sus desvelos al estudio del Derecho mercantil, colaborando en pro del perfeccionamiento de sus instituciones, y procurando, a través de la labor docente, ir formando rectos criterios, cimentados científicamente y prácticamente, en las futuras generaciones de juristas. En la obra que nos ocupa se recoge esa labor didáctica—lo que se trasluce ya en su denominación y en el lenguaje empleado—que en ella se remansa, apta así para la relectura, en evitación de ese inexorable *verba volant*, destino de inevitable olvido que tiene lo meramente hablado, por excelente que sea, y que sólo dándole un reflejo escrito puede evitarse para lo que de verdad vale. De todas suertes, las generaciones futuras, al cribar en la obra de las que les precedieron, irán sumiendo en el olvido aquello que, pese a haberse escrito, no merezca recordarse.

No ocurrirá así, ciertamente, con las obras de VICENTE Y GELLA. Buena prueba de ello es que ésta que comentamos, según su propio autor indica, puede considerarse como la cuarta edición de aquella *Introducción al Derecho mercantil comparado*, que ya hemos citado; pero, además, su monografía *Los títulos de crédito en la doctrina y en el Derecho positivo* va ya por la segunda edición (1942).

El primer tomo del *Curso de Derecho mercantil com-*

parado contiene, además de los conceptos fundamentales y de un bosquejo histórico del Derecho mercantil, el estudio del comerciante individual y social y de los títulos valores, estando el volumen dividido en tres títulos, además de dos capítulos, bajo la rúbrica de "Introducción": I) Parte general; II) Comerciante y sus auxiliares, y III) Cosas en Derecho mercantil. Respeto así el autor la clasificación que ya adoptó en su *Introducción al Derecho mercantil comparado*.

Los temas son analizados con profundo conocimiento, revelando la erudición del autor. En esto y en la mayor atención que se dedica al Derecho español, queda supeada la "Introducción" que sirve de base a la obra. La posición legislativa y doctrinal española pasa a primer término.

Cobra relieve el capítulo primero de este primer volumen, que viene a ampliar extraordinariamente el destinado al mismo tema en la "Introducción". Se analiza el tema de "Comercio y Derecho comercial". El autor estudia con acierto (pág. 39) las notas características del Derecho mercantil, aludiendo al concepto social de lo mercantil; más adelante (pág. 43) expone VICENTE Y GELLA lo que él llama contenido actual del Derecho mercantil, toda vez que él cree—y no es descaminado el criterio—"que la determinación de la materia mercantil en cada momento es, ante todo, un problema de orden histórico".

El autor, por otra parte, intenta probar en este primer capítulo cómo el Derecho mercantil está integrado—debe estarlo—tanto por actos en masa, como por actos aislados, objetivos, mercantiles, por sí mismos. ("El Derecho mercantil ya no es estrictamente el que regula las empresas organizadas. Habrá, al menos, que agregar: "y las operaciones realizadas por los no comerciantes cuando contraten con una empresa mercantil.")

Afianzado en el influjo del momento histórico, VICENTE Y GELLA, pese a los inconvenientes que cree ver en el Derecho mercantil centrado sobre los negocios de la empresa organizada o de los negocios en masa, no adopta tampoco un criterio firme, y señala que "actos de comercio son los que en cada momento se consideran tales por el legislador", al mismo tiempo que nos recuerda cómo en las ciencias sociales no es posible llegar a fijar certezas absolutas, sino únicamente relativas; y éstas—añadimos nosotros—no cabe duda que están en íntima conexión con el momento histórico (fundamentos sociales del Estado y la sociedad, criterios de orden político, etc.).

Convengamos, sin embargo, que precisamente en el momento actual el Derecho mercantil está más próximo del concepto de empresa que del acto objetivo, y que éste no sirve en realidad para acotar la materia mercantil, que, por otra parte, invade zonas cada vez más amplias, tradicionalmente privativas del Derecho civil, lo que hace pensar en una verdadera comercialización de este último. (Cfr. GARRIGUES: "Concepto del Derecho mercantil", en *REVISTA DE DERECHO PRIVADO*, 1943, págs. 369-383.)

Basten, por ahora, estas breves observaciones a la obra

(1) REVISTA DE DERECHO PRIVADO, 1941, págs. 217 y siguientes.